



Universidad
Finis Terrae

Informe de Impacto Regulatorio N° 5

Facultad de Economía y Negocios – Facultad de Derecho

Universidad Finis Terrae

Costos sociales del juego *online* en Chile.
**Un análisis crítico del proyecto de ley que regula
el desarrollo de plataformas de apuestas en línea**

Julio, 2026

Costos sociales del juego *online* en Chile. Un análisis crítico del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea

Informe de Impacto Regulatorio N° 5

Julio de 2026

Autores: Juan Carlos Oyanedel¹ y Miguel Ángel Vargas²

Resumen Ejecutivo

El mercado de apuestas en línea en Chile ha experimentado un crecimiento explosivo durante la última década, operando actualmente en un vacío regulatorio que genera tanto oportunidades fiscales como riesgos sanitarios significativos. En 2024, aproximadamente 5.4 millones de chilenos (el 29 %) participaron en apuestas deportivas o casinos en línea, generando un mercado no regulado con ingresos brutos estimados en 3.100 millones de dólares (Oyanedel y Vargas, 2025). Este nivel de participación es uno de los más altos de América Latina y refleja un traslado masivo desde los casinos físicos hacia plataformas digitales.

En 2025, el mercado regulado registró ingresos brutos de 834,5 millones de dólares, mientras que el segmento *online* no autorizado alcanzó 457,4 millones de dólares (0.13% PIB), representando poco más de un tercio de la industria total (Araya et al., 2026). Sin embargo, los costos del juego *online* en Chile son sustanciales. El juego *online* no solo genera el costo monetario de la apuesta perdida, sino que incrementa la probabilidad de depresión y de cometer suicidio, disminuye la productividad, y genera externalidades negativas al resto de la familia. El modelo de datos completo que incorpora estas variables de Oyanedel y Vargas (2025) estima los costos sociales anuales entre 985 millones y 1.100 millones de dólares estadounidenses. Incluso en el escenario más optimista de recaudación fiscal (800 millones de dólares estadounidenses anuales), estos costos sociales superan los beneficios tributarios, sugiriendo que la regulación actual podría ser insuficiente sin mecanismos robustos de protección del consumidor y prevención de daños.

¹ Sociólogo Universidad de Chile, PhD en Derecho, King's College London, Reino Unido. Profesor Titular, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Andrés Bello. Correo electrónico: juan.oyanedel@unab.cl.

² Ph.D. in Economics, The University of Reading, Reino Unido. Decano de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Finis Terrae. Correo electrónico: miguel.vargas@uft.cl.

1. Introducción. El contexto del *boom* del juego *online* en Chile

Durante la última década, Chile ha experimentado una expansión dramática del juego *online*, facilitada por la rápida penetración de internet (cercana al 90%) y más de 25 millones de conexiones móviles (Oyanedel y Vargas, 2025). La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, con operadores aprovechando el confinamiento para expandir su alcance. El cambio responde a tres procesos convergentes: intensificación del vínculo entre deporte profesional y apuestas mediante patrocinios y datos en tiempo real; masificación de internet y medios de pago digitales que permitieron que el juego dejara de depender de recintos presenciales; y expansión de publicidad hacia medios digitales, redes sociales y plataformas de *streaming* (Araya et al., 2026).

En Chile, este fenómeno adquirió visibilidad especialmente alta, con plataformas instalándose en el deporte profesional antes de que existiera regulación específica (Araya et al., 2026). Actualmente, más de 3.800 sitios web (principalmente Betano, Betsson y Coolbet) se dirigen a consumidores chilenos sin licencia local ni obligación tributaria (Oyanedel y Vargas, 2025). Aunque la Corte Suprema ha declarado ilegales estas plataformas, persisten dificultades prácticas de fiscalización (Araya et al., 2026). La Organización Mundial de la Salud advierte que tal marketing ubicuo normaliza el comportamiento de apuesta y puede aumentar la adicción. En Chile, el juego *online* se ha vuelto socialmente aceptable a pesar de ser formalmente ilegal.

2. Dimensión del mercado y evaluación para el caso chileno

La magnitud económica del fenómeno es sustancial. En 2025, el mercado regulado (70% de los casinos físicos) registró ingresos brutos de 834,51 millones de dólares (0.23% del PIB), generando 157,63 millones de dólares en recaudación específica (Araya et al., 2026). El mercado *online* no autorizado se estima en 457,38 millones de dólares (0.13% del PIB), representando poco más de un tercio de la industria total (Araya et al., 2026). Desde la perspectiva de los usuarios, encuestas en Santiago reportaron que el 75% de adultos realizó algún tipo de apuesta en el último año, y cerca del 14% experimentó problemas con el juego durante su vida. Investigaciones longitudinales encontraron que la proporción de individuos en algún riesgo aumentó del 14,3% en 2015 al 16,1% en 2018. Críticamente, la mayoría proviene de estratos socioeconómicos bajos, y el traslado hacia el juego *online* fuertemente comercializado a adultos jóvenes puede exacerbar vulnerabilidades (Oyanedel y Vargas, 2025).

Se estima que entre 750.000 y 1.000.000 de adultos chilenos (5-7% de la población adulta) se dedican a comportamientos de juego de riesgo moderado o problemático anualmente, con aproximadamente 150.000 a 200.000 individuos (1-1,5% de adultos) cumpliendo criterios para trastorno de juego (Oyanedel y Vargas, 2025).

3. Una estimación de los costos sociales del juego

El juego de azar, especialmente en su modalidad *online*, representa un grave problema de salud pública con costos sociales y económicos sustanciales. En Chile, se estima que los costos médicos directos derivados de tratar el trastorno por juego y sus comorbilidades (depresión, ansiedad, abuso de sustancias y estrés crónico) ascienden a aproximadamente 55 millones de dólares anuales. Cerca del 20% a 30% de las personas con problemas de juego sufren depresión mayor con costos de tratamiento de unos 20 millones de dólares, mientras que el abuso de sustancias comórbido afecta al 12 por ciento de los jugadores problemáticos, sumando otros 18 millones de dólares en costos. El estrés crónico relacionado con el juego exacerba condiciones físicas como hipertensión y úlceras, generando aproximadamente 14 millones de dólares adicionales en costos de atención médica. Por cada persona con problemas de juego, aproximadamente seis personas de su entorno sufren daños de “segunda mano”.

Más allá de los costos médicos directos, los costos indirectos incluyen la pérdida de productividad laboral, el desempleo y la reducción de ahorros e inversión. Un aspecto crítico es que la mayoría de las plataformas *online* operan desde el extranjero, lo que significa que el dinero perdido en apuestas sale de Chile, reduciendo significativamente los efectos multiplicadores económicos domésticos. Sin embargo, los mayores impactos provienen de los costos intangibles, como la disminución de la calidad de vida, el sufrimiento psicológico, las rupturas familiares y el suicidio, que a menudo superan con creces los costos medibles. Estos daños intangibles se valorizan mediante técnicas especializadas que asignan un valor económico a elementos como la angustia emocional y la reducción de la calidad de vida.

Las estimaciones del costo social total en Chile varían significativamente según el enfoque utilizado: un modelo que utiliza solo información disponible de manera directa y fácil de cuantificar, como costos médicos documentados y gastos en justicia penal, sugiere un mínimo de 200 millones de dólares anuales. En contraste, un modelo que incluye la valoración completa de todos los daños, asignando un valor económico a elementos como la angustia emocional, la reducción de la calidad de vida, las rupturas familiares y los suicidios, eleva la cifra a entre 985 millones y

1.100 millones de dólares anuales. Esta magnitud es coherente con la evidencia internacional; por ejemplo, en Inglaterra los costos sociales alcanzan hasta 2.200 millones de dólares anuales, en el estado de Victoria (Australia) unos 5.000 millones de dólares y en la República Checa entre 500 y 570 millones de dólares. La diferencia sustancial entre ambas estimaciones subraya que los costos intangibles representan la mayor parte del daño real que causa el juego problemático a la sociedad.

4. Análisis crítico del proyecto de ley chileno

El proyecto de ley para regular esta industria, ingresado en marzo de 2022, revisado en 2023 y bajo consideración del Senado en 2025 (Boletín N° 14838-03), buscaría establecer un régimen nacional de licencias para casinos *online* y casas de apuestas deportivas. El proyecto propone licencias de cinco años, un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos (con una tasa efectiva superior al 30% cuando se incluyen otros gravámenes) y requiere que los operadores financien programas de juego responsable.

Las proyecciones iniciales del gobierno sugerían unos 50 millones de dólares en ingresos fiscales anuales, pero investigaciones comisionadas por la industria indican que el potencial fiscal es mucho mayor. La empresa Yield Sec en 2025 estimó que si las apuestas *online* se regularan y gravaran efectivamente, Chile podría recaudar entre 600 y 800 millones de dólares anuales, diez veces la estimación original del Ministerio de Hacienda, porque el mercado es significativamente más grande de lo que las autoridades creían. El análisis del Centro de Estudios Públicos confirma esta magnitud: la pérdida potencial de recaudación bajo una tasa del 20% sobre el mercado *online* no autorizado actual se aproximaría a los 86,298 millones de dólares anuales solo por concepto de impuesto específico (Araya et al., 2026).

Sin embargo, la promesa económica de la regulación debe sopesarse cuidadosamente contra los costos sociales. El análisis crítico revela varias tensiones fundamentales. Primero, existe un balance costo-beneficio potencialmente desfavorable. Incluso en el escenario más optimista de recaudación (800 millones de dólares), los costos sociales bajo un modelo que considere todos los costos posibles (1.100 millones de dólares) superan los beneficios fiscales. En otras palabras, aunque el Estado capture 800 millones de dólares en impuestos, la sociedad chilena podría estar pagando entre 985 y 1.100 millones de dólares en costos sociales, resultando en un balance negativo neto. Los beneficios de la

regulación pueden no compensar los daños si no se establecen mecanismos estrictos de reducción de riesgos (Oyanedel y Vargas, 2025).

Segundo, existe insuficiencia de las medidas preventivas contempladas. El proyecto requiere que los operadores financien programas de juego responsable, pero la experiencia internacional advierte que el marketing ubicuo normaliza el comportamiento de apuesta y aumenta la adicción. Los controles publicitarios propuestos parecen insuficientes frente a la sofisticación de las estrategias de captación de usuarios empleadas por operadores internacionales. Tercero, existe una dimensión de vulnerabilidad socioeconómica. La mayoría de los individuos que experimentan problemas de juego en Chile provienen de estratos socioeconómicos bajos. El traslado hacia el juego *online*, fuertemente comercializado a adultos jóvenes, puede exacerbar estas vulnerabilidades, generando un efecto regresivo donde los sectores más pobres soportan desproporcionadamente los daños del juego mientras que los beneficios fiscales se distribuyen a nivel nacional.

5. Experiencias Internacionales: lecciones de Reino Unido, Australia y Países Nórdicos

La experiencia internacional proporciona lecciones críticas. En el Reino Unido, la Gambling Commission implementa requisitos estrictos de licencia, límites de depósito obligatorios y herramientas de autoexclusión, pero los costos sociales del juego permanecen sustanciales en 1,40 a 2,36 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Australia ha adoptado restricciones severas sobre publicidad de apuestas, especialmente durante eventos deportivos en vivo y horarios de protección al menor, con costos sociales en Victoria estimados en 4,9 mil millones de dólares estadounidenses anuales en 2014-15, demostrando que incluso regulación robusta no elimina completamente los daños.

Suecia y Noruega han implementado enfoques aún más restrictivos, con monopolios estatales, requisitos de licencia extremadamente estrictos, prohibiciones de publicidad durante eventos deportivos, y financiamiento obligatorio de investigación sobre daños (Araya et al., 2026). También, en estos países se ha implementado un tope a las pérdidas que un individuo puede incurrir en un año condicional a sus ingresos. Sin embargo, incluso con regulación muy restrictiva, los costos sociales del juego problemático permanecen significativos. Una lección crítica es que la regulación sin protecciones robustas puede amplificar los daños al normalizar y expandir el acceso al juego. En múltiples jurisdicciones, la legalización ha coincidido con aumentos en la prevalencia de juego problemático, particularmente entre grupos vulnerables.

6. Recomendaciones de Política Pública

Para que el proyecto de ley chileno minimice los efectos nocivos del juego, se recomiendan medidas informadas por la experiencia internacional: (1) políticas estrictas de licencias con auditorías independientes regulares y prohibición de operadores con antecedentes de fraude; (2) límites de depósito y pérdida obligatorios con confirmación activa del usuario antes de aumentarlos; (3) controles rigurosos de publicidad, especialmente en horarios de protección al menor y durante eventos deportivos en vivo; (4) financiamiento garantizado de 2-3% de ingresos brutos para prevención, tratamiento e investigación; (5) transparencia y monitoreo de datos por segmento demográfico para identificar efectos; (6) sistemas robustos de autoexclusión vinculantes con información compartida entre operadores; y (7) investigación continua independiente sobre daños emergentes. La experiencia internacional demuestra que la regulación sin protecciones robustas puede amplificar los daños al normalizar y expandir el acceso al juego.

7. Conclusiones

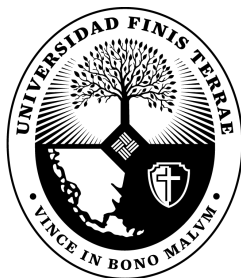
El mercado de apuestas *online* en Chile es una realidad económica que requiere intervención estatal. Sin embargo, la regulación no debe concebirse únicamente como herramienta de recaudación fiscal, sino primordialmente como política de salud pública. El análisis costo-beneficio es claro: aunque la regulación promete recaudar 600-800 millones de dólares anuales, los costos sociales del juego *online* (985 a 1.100 millones de dólares bajo un modelo completo) potencialmente superan estos beneficios. Incluso bajo estimaciones conservadoras (200 millones de dólares), los costos sociales son un cuarto de los beneficios fiscales proyectados.

La experiencia internacional demuestra que la regulación sin protecciones robustas puede amplificar los daños al normalizar y expandir el acceso al juego. El Reino Unido, Australia y los países nórdicos han implementado regulaciones progresivamente más restrictivas, pero incluso estas no han eliminado los costos sociales sustanciales del juego problemático. La regulación del juego *online* en Chile presenta una oportunidad para ordenar un mercado que hoy opera al margen de la ley, pero el éxito dependerá de su capacidad para contener los costos sociales que, de otro modo, recaerán sobre las familias y el sistema de salud pública chileno. Las recomendaciones presentadas buscan asegurar que la regulación priorice la salud pública y la protección del consumidor, no solo la recaudación fiscal.

Referencias

Araya, A., Belmar, F., Kuwae, X., & Aliaga, S. (2026). Apuestas en Chile: regulación y peso económico de un mercado en expansión. Puntos de Referencia, 778, Centro de Estudios Públicos.

Oyanedel, J. C., & Vargas Román, M. (2025). Estimating the economic and social costs of *online* gambling in Chile. Documento de trabajo.



Universidad
Finis Terrae

finis.cl